
AMNISTÍA INTERNACIONAL

SERVICIO DE NOTICIAS 09/95

A: ENCARGADOS DE PRENSA
DE: OFICINA DE PRENSA DEL SI
FECHA: 11 DE ENERO DE 1995

ÍNDICE AI: NWS 11/09/95/s

DISTR: SC/PO

ARTÍCULOS DEL SERVICIO DE NOTICIAS: EXTERNO - **ÁFRICA CENTRAL - RUANDA, BURUNDI Y PARTES DE ZAIRE** - SÓLO PARA RESPUESTA (El equipo se llevará también consigo este comunicado de prensa en su misión), **SUDÁN**, (Versión enmendada, véanse las correcciones indicadas seguidamente).

ATENCIÓN A ESTAS CORRECCIONES AL COMUNICADO DE PRENSA SOBRE SUDÁN:
(Estas correcciones han sido realizadas por el Programa de Asuntos Jurídicos y Relación con Organizaciones Internacionales - AJOI).

<ul style="list-style-type: none">- se ha insertado «arbitrarias» después de 'las detenciones' en la quinta línea del segundo párrafo.- se ha insertado «ilegítima» después de 'detención' en la quinta línea del quinto párrafo.- se ha insertado «e imparcial» después de 'independiente' en la primera línea del segundo punto sangrado (primera página).

COMUNICADOS DE PRENSA INTERNACIONALES

Sudán - 25 de enero - VÉANSE LOS SERVICIOS DE NOTICIAS 275 Y 261

Comisión de Derechos Humanos de la ONU - 31 de enero - VÉASE EL SERVICIO DE NOTICIAS 06/95

Turquía - 8 de febrero - VÉASE EL SERVICIO DE NOTICIAS 261

Norte de Iraq - 28 de febrero - VÉASE EL SERVICIO DE NOTICIAS 266

COMUNICADOS DE PRENSA ESPECÍFICOS Y LIMITADOS

**ÍNDICE AI: AFR 47/WU 01/95
11 DE ENERO DE 1995**

AMNISTÍA INTERNACIONAL ENVÍA UN EQUIPO DE INVESTIGACIÓN A ÁFRICA CENTRAL.

Dado que se siguen recibiendo informes sobre graves abusos cometidos contra los derechos humanos en África, y particularmente en Ruanda, Burundi y algunas áreas de Zaire oriental, Amnistía Internacional ha decidido enviar un equipo de investigación a esa región.

El equipo investigará los informes de abusos pasados y recientes, y realizará actividades de observación sobre las medidas aplicadas para acabar con los homicidios políticos, las «desapariciones», la tortura y la detención arbitraria prolongada en los tres países afectados.

Está previsto que el equipo llegue a Kigali, Ruanda, a mediados de enero, y que lleve a cabo sus actividades en la región durante los próximos tres meses. Los tres miembros que componen este equipo de investigación son Matthew Ganda, de Sierra Leona (coordinador y portavoz del equipo), Holo Makaia, de Tanzania, y Jo Wells, del Reino Unido.

Si desean más información sobre las actividades del equipo deben ponerse en contacto con la Oficina de Prensa del Secretariado Internacional de Amnistía Internacional en los siguientes números de teléfono o fax:

**Teléfono: 44 71 413 5564
Fax: 44 71 413 5815 / 956 1157.**

NO PUBLICAR ANTES DEL 25 DE ENERO DE 1995

ÍNDICE AI: AFR 54/WU 02/95

SUDÁN: AMNISTÍA INTERNACIONAL LANZA UNA CAMPAÑA CONTRA LOS ABUSOS QUE EN SUDÁN SE COMETEN CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS.

NAIROBI – Amnistía Internacional, con motivo del lanzamiento de su primera campaña de envergadura en 1995, ha manifestado que las Naciones Unidas (ONU) deben crear un equipo de observación de los derechos humanos, de carácter civil e internacional, como primera medida para acabar con el ciclo de abusos que contra esos derechos se cometen tanto en el norte de Sudán, controlado por el gobierno, como en el sur del país, zona asolada por la guerra.

Pierre Sané, secretario general de Amnistía Internacional, ha manifestado en una conferencia de prensa celebrada en Nairobi: «Disponer de observadores internacionales sobre el terreno hará que a las fuerzas gubernamentales y de la oposición les sea más difícil seguir cometiendo con libertad los homicidios, la tortura y las detenciones arbitrarias que han fracturado la sociedad sudanesa y profundizado los odios políticos durante los último cinco años».

Pierre Sané ha dicho que, dado el bloqueo gubernamental a la entrada al país del experto de derechos humanos en Sudán de las Naciones Unidas, y los escasos progresos del proceso de paz auspiciado por la Autoridad Intergubernamental de asuntos relacionados con la sequía y el desarrollo, nunca antes había sido mayor la necesidad de que la comunidad internacional intensifique sus actividades de observación de los derechos humanos.

El secretario general de AI, además, ha declarado: «El futuro de Sudán depende de que en todo el país se establezca un mayor respeto hacia los derechos humanos. La carnicería del sur del país, asolado por la guerra, no es más que una parte del conjunto de la situación porque, incluso en áreas menos afectadas por la contienda civil, la brutal violación de los derechos humanos también ha dividido a la población».

Al abogar en favor de que la ONU establezca una presencia de observadores de los derechos humanos, Pierre Sané subrayó que la raíz de la situación de emergencia humanitaria a la que se enfrenta Sudán no es otra que el desastre en que se encuentran sumidos los derechos humanos en ese país, que se ha saldado con la detención ilegítima de millares de personas y la muerte de decenas de miles.

Según Pierre Sané: «La ONU proporciona ayuda humanitaria, que le supone un enorme gasto, para atajar las consecuencias de la guerra y de los abusos contra los derechos humanos, pero esto no es suficiente. Es prioritaria la resolución de los graves problemas que Sudán tiene con los derechos humanos».

De acuerdo con la organización, los observadores de derechos humanos tienen que:

- informar a las autoridades y a la ONU de los abusos que se cometen contra los derechos humanos y hacer un seguimiento de casos individuales para asegurarse de que se actúa al respecto;
- proporcionar un organismo independiente e imparcial al que los sudaneses puedan recurrir para informar sobre violaciones de los derechos humanos sin temor a represalias;
- trabajar con las autoridades para mejorar las políticas y prácticas relacionadas con los derechos humanos en el país.

La organización, en un extenso informe recientemente publicado sobre la situación de los derechos humanos en Sudán desde el golpe de Estado de 1989, muestra que tanto el gobierno militar, presidido por Omar Hassan Ahmad al Bashir, como las dos facciones de la principal oposición armada al régimen —el Ejército Popular de Liberación de Sudán (EPLS), dirigido por John Garang de Mabior, y el Ejército para la Independencia del Sur de Sudán (EISS), cuyo jefe es Riek Machar Teny-Dhurgon— son culpables de la comisión de graves abusos contra los derechos humanos.

Desde que se hizo con el poder, el gobierno sudanés ha convertido en práctica habitual por todo el país —en su afán por suprimir toda oposición política y por moldear a la sociedad de acuerdo con su interpretación de un programa islamista radical— la tortura y la detención de presuntos opositores en las, así denominadas, «casas fantasma», que no son sino los centros secretos de detención de las fuerzas de seguridad.

A muchos presuntos opositores al gobierno, entre ellos sindicalistas, activistas de partidos políticos proscritos, estudiantes, periodistas y personas originarias del sur de quienes se sospecha que simpatizan con los grupos de oposición armada, se los arresta, tortura, se los encarcela durante breves periodos, se los libera y luego se los vuelve a detener.

A pesar de las negativas del gobierno, Amnistía Internacional ha documentado la tortura de centenares de personas desde 1989 tanto en la capital, Jartum, como en otras ciudades, así como en la región meridional del país, que se encuentra en guerra. El juez que en 1994 juzgó a Gaafar Yassin y a otras cuatro personas por cargos de conspiración aceptó pruebas médicas según las cuales a los acusados los habían golpeado, quemado, azotado con mangueras de plástico y obligado a permanecer descalzos sobre planchas de metal caliente. A pesar de todo ello, el juez los condenó. Esta farsa de la Justicia demuestra hasta qué punto las purgas gubernamentales han hecho del supuestamente independiente poder judicial un instrumento sumiso a la manipulación política.

Cada vez que un preso de conciencia es arrestado, aunque sólo sea durante un breve periodo, Amnistía Internacional teme por su seguridad, como sucedió con las detenciones en masa de decenas de sindicalistas en la localidad de Athara, al norte del país, en octubre de 1994. Amnistía Internacional continúa hondamente preocupada por la integridad de 12 funcionarios del Estado originarios del sur del Sudán que fueron detenidos el mes pasado, junto con otras personas, en Juba, la principal ciudad del sur del país. Sigue sin conocerse su paradero.

En las zonas en guerra del sur y en las Montañas Nuba las fuerzas del gobierno, del EPLS y del EISS —conocido anteriormente como EPLS-Unido— han sido todas responsables del homicidio y «desaparición» de miles de civiles, con lo que han creado una catástrofe humanitaria de hambrunas y el desplazamiento en masa de millones de personas. Todas las partes implicadas en este conflicto han expulsado a los campesinos de sus tierras y saqueado y destruido cosechas y propiedades.

En junio de 1994, por ejemplo, un equipo de investigación de Amnistía Internacional que visitó el sur de Sudán entrevistó a los supervivientes de una serie de homicidios indiscriminados cometidos por efectivos de las Fuerzas Populares de Defensa (milicia gubernamental) a lo largo de la línea de ferrocarril que une el norte con el sur de Sudán. La campaña de tierra quemada llevada a cabo por las fuerzas gubernamentales en esa zona se ha saldado con centenares de homicidios políticos, violaciones, secuestro de niños y el desplazamiento de millares de civiles. El mes pasado se produjeron nuevos incidentes de homicidio y saqueo por parte de las Fuerzas Populares de Defensa.

En los combates entre las dos facciones de la oposición armada también se cometen graves abusos contra los derechos humanos. El EPLS, que practica una despiadada represión de toda disensión interna, ha sido el responsable del homicidio de centenares de civiles de origen étnico nuer. Se ha detenido a presos de conciencia, se los ha torturado y se les ha dado muerte. En agosto de 1994, tropas del EPLS secuestraron en un campo de refugiados situado en el norte de Uganda al menos a 17 hombres, entre ellos Carlo Madut Deng, médico que había abandonado el EPLS. Se cree que los han matado a todos.

Tras la escisión del movimiento de oposición en 1991, el grupo disidente, denominado actualmente EISS, masacró a millares de civiles de origen étnico dinka y desplazó a más de 200.000 personas. En octubre de 1994, fuerzas del EISS atacaron y saquearon campos de ganado en torno a Akor, dando muerte a más de un centenar de civiles.